

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

RECUSACIÓN	
DEMANDANTE	ALBERTO CAÑIZARES MADARIAGA
DEMANDADO	COLPENSIONES y OTROS
RADICADO	5001-31-05-006-2022-00084-03
TEMAS	Recusación
DECISIÓN	Declara infundada la recusación.

Medellín, siete (7) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

La Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los magistrados HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA, y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto por el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, procede a resolver de plano la recusación formulada al interior del proceso ordinario laboral, promovido por el señor **ALBERTO CAÑIZARES MADARIAGA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES y OTROS**.

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 017**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I.- ANTECEDENTES

Se recibió por parte de esta Sala, el auto de fecha 17 de abril de 2024 remitido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, mediante el cual no se aceptó la causal de recusación presentada por el apoderado judicial de la parte demandante, Dr. Diego Ramírez Torres.

II.- SUPUESTOS FÁCTICOS.

El apoderado judicial del demandante mediante memorial de fecha 21 de febrero de 2024, le solicitó a la Juez Sexta Laboral del Circuito de Medellín, su apartamiento en el conocimiento y trámite del proceso ordinario laboral identificado con el radicado único nacional 05001-31-05-006-2022-00084-00, con fundamento en la causal séptima de recusación del art. 141 del Código General del Proceso (archivo PDF 026).

“ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. *Son causales de recusación las siguientes:*

(...)

*7. Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, **denuncia penal** o disciplinaria contra el juez, su cónyuge o compañero permanente, o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación. (Negrillas de la Sala)*

(...)”

Pues, según refiere el memorialista, el pasado 30 de enero de 2024, radicó ante la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, una **denuncia penal** contra de la Juez Sexta Laboral del Circuito de Medellín, argumentando que aquella en su práctica como juez incurrió en el delito presunto de

PREVARICATO, tipo penal contemplado en el artículo 413 del Código Penal¹.

Para fundamentar su dicho arguyó que, ante el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, obra como apoderado en nueve (9) procesos, y en algunos de ellos se han presentado las siguientes novedades:

En el proceso **05001-31-05-006-2021-00331-00** la funcionaria judicial se apartó de la doctrina probable emanada de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, relativa a las cargas probatorias.

En el proceso con radicado **05001-31-05-006-2020-00172-00**, en la audiencia la juez adujo que: “el doctor Diego Ramírez Torres, tiene atiborrado los despachos de la ciudad de Medellín con demandas”

Y que, en el proceso radicado **05001-31-05-006-2021-00445-00**, la juez intentó inducir a la demandante en error durante el interrogatorio de parte, aunado de lo anterior, dijo que en ese proceso la funcionaria judicial compulsó copias de las actuaciones por él realizadas en calidad de representante judicial, ante el Consejo Superior de la Judicatura.

Indicó, además, que esta misma funcionaria judicial, ha venido apartándose de la doctrina probable frente al tema de la carga probatoria que les incumbe a los fondos privados de pensiones, en los diferentes procesos ordinarios laborales donde se discute la ineficacia de la afiliación y/o traslado entre regímenes pensionales, citando para ello los procesos con radicado único nacional: 05001-31-05-006-2021-00331-00, 05001-31-05-006-2020-00172-00, 05001-31-05-006-2021-00445-00.

¹ **ARTÍCULO 413. PREVARICATO POR ACCIÓN.** *El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses.*

También señaló que el día 21 de septiembre de 2023, presentó una queja disciplinaria ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Medellín contra la Dra. MARÍA JOSEFINA GUARÍN GARZÓN, alegando que en su práctica como juez incurrió en la falta contra el deber como servidor público, contemplado en el numeral 7 de artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, sin embargo, la referida Comisión profirió providencia inhibitoria el día 31 de octubre de 2023, declaró que las conductas alegadas contra la funcionaria no constituyen falta disciplinaria.

Finalmente aduce el memorialista haber formulado denuncia penal el día 30 de enero de 2024, contra la Dra. MARÍA JOSEFINA GUARÍN GARZÓN, a través de la página web de la Fiscalía General de la Nación (radicado No. 2024013000303) por presuntamente incurrir en las practicas descritas en el tipo penal descrito en artículo 413 del Código Penal en mi contra.

Frente a la recusación propuesta, la funcionaria de primera instancia en proveído del 17 de abril de 2024 se pronunció señalando que no había lugar a la recusación formulada, dado que: *“...si bien se allega con el escrito de recusación pantallazo de radicación de denuncia penal, en el mismo no aparece que la denuncia ciertamente sea contra la suscrita; y lo segundo, aun si apareciera que tal denuncia es contra esta juez, la norma penal exige como condición para que proceda la recusación que la persona denunciada haya sido vinculada al proceso penal, esto es, que se le haya escuchado en indagatoria o se le haya declarado persona ausente; esta juez no ha sido escuchada en indagatoria, ni acredita el recusante se me haya declarado persona ausente por lo tanto no estoy vinculada a proceso alguno por la denuncia que aduce el apoderado recusante...”* (archivo pdf 027).

III.-CONSIDERACIONES DE LA SALA.

Las normas que consagran las causales de impedimento y recusación, tienen como finalidad la de garantizar la imparcialidad del juez en el proceso, además al estar previamente definidas por la ley, evitan que

las mismas se propongan de manera caprichosa por las partes en el proceso, con el fin de lograr cambios injustificados en el director del proceso, o dilación injustificada en la solución de la litis.

De este modo, para que resulte procedente una recusación, es necesario que se cumpla con las causales descritas en el artículo 141 del Código General del Proceso, aplicable en materia laboral y seguridad social en virtud de lo dispuesto en el art. 145 del CPTSS, veamos:

“ARTÍCULO 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. *Son causales de recusación las siguientes:*

- 1. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, interés directo o indirecto en el proceso.*
- 2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente.*
- 3. Ser cónyuge, compañero permanente o pariente de alguna de las partes o de su representante o apoderado, dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad.*
- 4. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, curador, consejero o administrador de bienes de cualquiera de las partes.*
- 5. Ser alguna de las partes, su representante o apoderado, dependiente o mandatario del juez o administrador de sus negocios.*
- 6. Existir pleito pendiente entre el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 3, y cualquiera de las partes, su representante o apoderado.*
- 7. Haber formulado alguna de las partes, su representante o apoderado, denuncia penal o disciplinaria contra el juez, su cónyuge o compañero permanente, o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, antes de iniciarse el proceso o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se halle vinculado a la investigación.***
- 8. Haber formulado el juez, su cónyuge, compañero permanente o pariente en primer grado de consanguinidad o civil, denuncia penal o disciplinaria contra una de las partes o su representante o apoderado, o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil o víctima en el respectivo proceso penal.*
- 9. Existir enemistad grave o amistad íntima entre el juez y alguna de las partes, su representante o apoderado.*
- 10. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil, o primero de*

afinidad, acreedor o deudor de alguna de las partes, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito, sociedad anónima o empresa de servicio público.

11. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las partes o su representante o apoderado en sociedad de personas.

12. Haber dado el juez consejo o concepto fuera de actuación judicial sobre las cuestiones materia del proceso, o haber intervenido en este como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo.

13. Ser el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral 1, heredero o legatario de alguna de las partes, antes de la iniciación del proceso.

14. Tener el juez, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o civil, pleito pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe fallar.” (Negrillas de la Sala).

Para fundamentar la solicitud de recusación, el Dr. Diego Ramírez Torres asegura que el 30 de enero de 2024, radicó en la página web de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, una **denuncia penal** en contra de la Juez, argumentando que aquella en su práctica judicial, incurrió en el delito de prevaricato por acción regulado en el art. 413 del Código Penal, que determina como deber de todo servidor público.

Y como prueba de la referida denuncia penal, el apoderado judicial aportó lo siguiente:

“1.- Pantallazo de la denuncia penal radicada el treinta (30) de enero de 2024 en la página de la Fiscalía General de la Nación con radicado No. 2024013000303.”

Folios 9 del archivo PDF 009, veamos:



SU DENUNCIA HA SIDO REGISTRADA EXITOSAMENTE CON EL NÚMERO
2024013000303

Importante: la Fiscalía General de la Nación le informará el estado de la denuncia al correo electrónico del denunciante.

FISCALIA GENERAL DE LA NACION - CENTRO DE CONTACTO



La juez de primer grado, al resolver sobre la recusación presentada, no aceptó la misma, replicando que, en el pantallazo aportado con el escrito de recusación, no se logra apreciar que la denuncia haya sido en su contra, y mucho menos se aprecia una providencia en la que se haya efectuado vinculación formal al proceso penal.

De entrada, anticipa la Sala que, no se encuentran probados los supuestos para entender configurada la causal séptima del art. 141 del Código General del Proceso, invocada por el apoderado judicial, por cuanto esta normativa procesal prevé la formulación de una denuncia penal o disciplinaria, es decir, presupone la existencia de un acto a través del cual se da conocimiento a la autoridad competente de la existencia de unos **hechos concretos** que pudieran ser constitutivos de infracción disciplinaria, o el delito penal endilgado a la funcionaria judicial, antes o después de iniciarse el proceso, pero se requiere además que la denuncia se refiera a **hechos ajenos al proceso o a la ejecución de la sentencia, y que el denunciado se encuentre vinculado formalmente a la investigación.**

Y en el presente asunto, si bien se corrobora que el haberse presentado una DENUNCIA PENAL a través de la página web de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN la cual quedo radicada con el N° 2024013000303, también es cierto que el documento aportado para afianzar la causal, no permite identificar quien es la persona denunciada, y el tipo penal atribuido.

Y mucho menos obra una providencia en el que el ente investigador hubiese formulado imputación de cargos a la Dra. MARÍA JOSEFINA GUARÍN GARZÓN, o se hubiese declarado a esta misma funcionaria como persona ausente, en caso de no habersele podido ubicar.

Y es que para que se entienda configurada la causal séptima del art. 141 del CGP, no sólo exige que contra el funcionario judicial recusado se haya formulado denuncia penal o disciplinaria, por alguna de las partes, su representante o apoderado, sino que es menester que aquél haya sido vinculado a la investigación que se apertura o su vinculación a la misma, es decir, resulta imprescindible que el recusado haya sido notificado de su adelantamiento.

Y como dichas pruebas no obran en el plenario, y la carga de la prueba recaía en la parte recusante, deberá declararse infundada la causal de recusación propuesta.

Sin costas en esta actuación.

IV.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral,

RESUELVE:

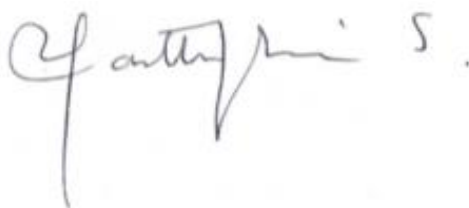
Primero: DECLARAR infundada la recusación formulada por el apoderado judicial de la parte demandante, Dr. Diego Ramírez Torres contra la Juez Sexta Laboral del Circuito de Medellín, según lo expuesto en procedencia.

Segundo: DEVOLVER INMEDIATAMENTE las diligencias al juzgado de origen para que se continúe con el trámite.

Tercero: Sin Costas en esta actuación.

Cuarto: Se ordena notificar por **ESTADOS** lo resuelto.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por
Estados N° 078 del 8 de mayo de 2024.

Consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/161>